



## RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

### SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA:	SENTENCIA – RECURSO DE APELACIÓN
PROCESO:	ORDINARIO LABORAL – <u>PRIMERA INSTANCIA</u>
DEMANDANTE:	DIANA PATRICIA QUIRAMA ÁLVAREZ
DEMANDADOS:	PROTECCIÓN S.A.
RADICADO:	050013105-009-2017-00550
ACTA N°:	19

En la fecha indicada, la Sala Sexta de Decisión Laboral, conformada por los Magistrados **ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN** y **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**, se constituyó en audiencia pública en el proceso de trámite ordinario laboral de primera instancia promovido por DIANA PATRICIA QUIRAMA ÁLVAREZ en contra de PROTECCIÓN S.A., para pronunciarse en virtud del **RECURSO DE APELACIÓN** a favor de la demandada frente a la sentencia con la cual el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín finalizó la primera instancia.

La Magistrada del conocimiento, doctora Ana María Zapata Pérez, declaró abierta la audiencia. A continuación, la Sala, previa deliberación sobre el asunto, como consta en el **acta 19** de discusión de proyectos, adoptó el presentado por la ponente, el cual quedó consignado en los siguientes términos:

#### 1. ANTECEDENTES

##### 1.1. DEMANDA<sup>1</sup>

La demandante pretende con este proceso, que se DECLARE que le asiste el derecho a le pensión de sobrevivientes con ocasión al fallecimiento de su hijo CRISTIAN FABIAN BOTERO QUIRAMA. Y se CONDENE a PROTECCIÓN S.A. a reconocer el retroactivo pensional, con los ajustes anuales de ley y las mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación, las costas procesales y agencias en derecho, y lo que *ultra y extra petita* se demuestre en el proceso.

---

<sup>1</sup> Folio 1 – 13

Para sustentar sus pretensiones, afirmó que: **i)** Su hijo CRISTIAN FABIAN BOTERO QUIRAMA falleció el **14 de septiembre de 2015**, estaba afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad desde **noviembre de 2011**, y contaba con la densidad superior a 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte. **ii)** Dependía económicamente de su hijo, solicitó la pensión de sobrevivientes el 25 de enero de 2017 y la demandada la negó al considerar que no dependía económicamente de él.

## 1.2. CONTESTACIÓN DE PROTECCIÓN S.A.<sup>2</sup>

La entidad contestó oportunamente, oponiéndose a las pretensiones. Para ello, argumentó que a DIANA PATRICIA QUIRAMA ÁLVAREZ no le asiste derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, porque al momento del fallecimiento de su hijo CRISTIAN FABIAN BOTERO QUIRAMA no dependía económicamente de él, sino de su compañero permanente ANDERSON MONTOYA, padre de sus otros dos hijos; que la actora informó que el afiliado ya no trabajaba, que vivía solo desde hacía 18 meses, por lo que no es lógico afirmar que dependía económicamente del fallecido.

Propuso como excepciones de mérito las que denominó: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, COBRO DE LO NO DEBIDO, AUSENCIA DE DERECHO SUSTANTIVO Y FALTA DE CAUSA EN LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, AFECTACIÓN SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, COMPENSACION E INNOMINADA O GENÉRICA.

## 1.3. LA INTEGRACIÓN AL PROCESO DEL SEÑOR REINALDO BOTERO SALAZAR

En el auto admisorio se ordenó la vinculación al proceso del padre del causante, REINALDO BOTERO SALAZAR, como Litis consorte necesario por activa<sup>3</sup>, quien fue notificado personalmente el 3 de julio de 2018<sup>4</sup> pero no efectuó pronunciamiento alguno ni asistió a la audiencia pública celebrada el 26 de junio de 2019

## 2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del **26 de junio de 2019<sup>5</sup>**, el Juez CONDENÓ a PROTECCIÓN S.A. a reconocer a la actora la pensión de sobrevivientes a partir del 14 de septiembre de 2015 como consecuencia de la muerte de su hijo **CRISTIAN FABIAN BOTERO QUIRAMA**, por valor de salario mínimo legal vigente; a reconocer intereses moratorios sobre el retroactivo pensional, a partir del **21 de enero de 2017** y hasta el momento del pago

<sup>2</sup> Folio 48 – 66

<sup>3</sup> Folio 38

<sup>4</sup> Folio 160

<sup>5</sup> Folio 169- 171 y CD FOLIO 172

efectivo. ABSOLVIÓ respecto de cualquier derecho que le pudiese haber reclamado administrativamente el señor **REINALDO BOTERO SALAZAR** y condenó en costas a la demandada. Ordenó el descuento de los aportes en salud.

Para ello razonó de este modo: **i)** Invocó el artículo 13 de la Ley 797, y la sentencias **C – 111 de 2006 y SL 8406 de 2015** para abordar el análisis del acervo probatorio, deteniéndose en las investigaciones realizadas por la entidad (folios 93 a 106 y folios 89 – 94) y las declaraciones de los testigos del proceso, para concluir que, el causante tuvo como beneficiaria en salud a la solicitante por lo menos desde 2011 hasta el 2015, y que la contribución que realizaba a su madre era representativa, constituía un sustento económico importante para ella y el hecho de que su compañero permanente para el momento de la muerte del causante igualmente contribuyera al sostenimiento de aquella, sin embargo no resulta suficiente para considerar que la actora era autosuficiente económicamente. Que, de acuerdo con la prueba testimonial, **ANDERSON** y **CRISTIAN**, hicieron un pacto de repartirse las cargas económicas para poder sostener el hogar, y causante lo hacía y lo continuó haciendo a pesar de retirarse de convivir con su grupo familiar, en agradecimiento por todo lo que el compañero de su madre contribuyó para su sostenimiento, aportando desde que prestó el servicio militar y posteriormente, de manera continua, al encontrar una vinculación laboral. **ii)** También encontró acreditadas las condiciones en las que quedó la madre con ocasión de la muerte de su hijo, para concluir que esa contribución que realizaba en conjunto con su padrastro o compañero permanente de la demandante, sí era determinante, lo que advierte incluso en los análisis que hicieron los dos entes investigadores de la entidad accionada, que llegaron a la conclusión de que ésta tuvo que reducir sus gastos para poder sobrevivir, aspecto corroborado con las declarantes del proceso; haciendo énfasis en que la parte demandante probó que la contribución que ejercía el joven **CRISTIAN FABIAN** respecto de su madre era relevante, por consiguiente sí era subordinante económicamente, quedando acreditado así mismo, la no auto dependencia económica de la actora. **ii)** Para condenar a **INTERESES MORATORIOS**, señaló que en este caso no se acredita que se trata de un evento en el que de acuerdo con la jurisprudencia resulte procedente su exoneración, porque la primera razón o motivo de no reconocimiento de la prestación económica fue porque estaba en el trámite del bono pensional, y si bien el segundo argumento fue que había aparecido como reclamante el padre del causante, advierte que la segunda investigación es del **21 de noviembre del 2016**, tenía entonces, dos meses (artículo 1 de la ley 717 de 2001) para reconocerla, y tampoco lo hizo. Así, condenó a partir del **21 de enero de 2017**.

### 3. EI RECURSO DE APELACION

En la audiencia de Trámite y Juzgamiento, la demandada, de forma oportuna, interpuso y sustentó el recurso de apelación solicitando que se revoque la providencia, en tres aspectos: **i)** En relación con condena a la **PENSION DE SOBREVIVIENTES**, insiste en que no quedó probado que la demandante dependiera económicamente de su hijo **CRISTIAN**, quién si bien realizaba un aporte, éste no tiene las características para definir la dependencia económica de la demandante. Señala que, las fechas informadas por la actora a la entidad respecto al cese de la convivencia con su compañero no fueron claras, y agrega que, a partir de los ingresos del causante reportados en la historia laboral y el hecho de que viviera solo con sus propios gastos, al cotejarlo con la información sobre los aportes que entregaba a la madre, solo le quedaría un sobrante de \$63.000 para gastos personales. Así, insiste en que, de acuerdo con lo probado en el proceso, en criterio de la apoderada el aporte suministrado no era relevante para la manutención de la madre, quien también compartía su hogar con el señor **ANDERSON**.

**ii)** En caso de que se decida confirmar la anterior condena, solicita se revoque la CONDENA A INTERESES, invocando la sentencia **SL 8614 2017**, insistiendo en que, para **PROTECCIÓN S.A.** no fue claro que la demandante tuviera y ostentara el derecho de la pensión de sobrevivencia predicada y se presentó un beneficiario de mejor derecho como es el señor **REINALDO**. Así, solicita que tampoco se condene a indexación, porque el reconocimiento de la mesada pensional es de un SMLMV y **PROTECCIÓN S.A.** tiene la actualización monetaria anualizada de cada una de sus cuentas de ahorro individual.

**iii)** También solicita que se absuelva de la CONDENA EN COSTAS, por todos los trámites que se adelantaron y la buena fe que se presentó en el proceso.

#### **4. TRÁMITE, COMPETENCIA Y DETERMINACIÓN DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS EN LA SEGUNDA INSTANCIA**

Habiéndose corrido traslado para formular alegatos de conclusión en esta instancia<sup>6</sup>, solo **PROTECCIÓN S.A.** intervino, solicitando que se **REVOQUE** la decisión condenatoria de primera instancia, reiterando varios argumentos, así: Expresa que no se acreditó el requisito de dependencia económica, señalando que ROCÍO ALVAREZ DE QUIRAMA y LUZ MARIA CORREA ORTIZ son testigos de oídas; y luego de hacer referencia a varias afirmaciones de la actora en la diligencia de interrogatorio de parte, expresa que no se evidencia claramente cuánto era el valor al que ascendían los gastos familiares, entre alimentación, vivienda, servicios y además los gastos personales del fallecido, como transporte. Insisten en que se dejó claro que *“lo que aportaba el señor BOTERO QUIRAMA era solo un aporte”*, porque a pesar de ser la demandante ama de casa, ella derivaba su sustento del aporte de su compañero permanente. Reitera que el causante no realizaba cotizaciones para el momento de su fallecimiento, que su salario era variable

<sup>6</sup> Artículo 15 Decreto 806 de 2020

y que al suscribir su formulario de vinculación inicial no registró beneficiarios. Invoca la sentencia **SL 327 de 2020** de la que transcribe algunos apartes

Pues bien, se ha proferido una **DECISION CONDENATORIA** en contra de **PROTECCIÓN S.A.**, y en virtud de los argumentos del RECURSO DE APELACIÓN, el análisis se efectuará en el siguiente orden lógico: **i)** En primer lugar, se analizará el requisito de dependencia económica exigido por la Ley 797 de 2003 y su verdadero alcance, a partir de lo anterior, se resolverá como primer **problema jurídico** si, ¿en este caso se acreditó por **DIANA PATRICIA QUIRAMA** que dependía económicamente de su hijo **CRISTIAN FABIAN QUIRAMA** para el momento del fallecimiento?. **ii)** Resultan ajustadas a derecho las condenas a intereses moratorios e indexación?

## 5. EL ALCANCE DE DEPENDENCIA ECONÓMICA EXIGIDO EN LA LEY 797 DE 2003 EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES DE LOS PADRES FRENTE AL HIJO FALLECIDO

Para el caso de los padres, cuando quién fallece es el hijo, se consagra lo siguiente en el artículo 13 de la Ley 797:

“d) A falta de cónyuge, **compañero o compañera permanente** e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este”<sup>7</sup>

En la Sentencia **C 111 de 2006**, la Corte fijó el alcance de la expresión dependencia económica, a la Luz de los postulados de la **Carta Política de 1991**. **De acuerdo con este importante precedente**, para acreditarla no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono, miseria o indigencia- sino que, por el contrario, **basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que le permita al beneficiario obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna**.

En este contexto, se han identificado por la jurisprudencia un conjunto de reglas que permiten determinar si una persona es o no dependiente, a partir de la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, o lo que es lo mismo, del conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular. Estos criterios se pueden resumir en los siguientes términos: **i)** Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna; **ii)** El salario mínimo no es determinante de la independencia económica; **iii)** No constituye independencia económica recibir otra prestación; **iv)** La independencia económica no se configura

<sup>7</sup> **Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-111 de 2006**

por el simple hecho de que el beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional; **v)** Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir ingresos permanentes y suficientes; **vii)** Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica.

En el mismo sentido, se ha desarrollado la jurisprudencia nacional, señalando que el análisis en cada caso concreto debe orientarse a determinar el peso del aporte económico que efectuaba el hijo a sus progenitores para al momento de su fallecimiento, para verificar si ante su ausencia se afecta no solo el mínimo vital sino la congrua subsistencia de los padres. Así, la Corte Constitucional en sentencias como las **T-538 de 2015, T-725 de 2017 y T-424 de 2018**; y la sala Laboral de la Corte Suprema en las **SL 11871 de 2017, SL 2605 de 2019, SL 3772 de 2019 y SL 3286 de 2019**.

## 6. CASO CONCRETO

De acuerdo con la sentencia de primera instancia, se sabe que el Juez de instancia concluyó que en este proceso se había acreditado el requisito de dependencia económica de la madre frente al hijo CRISTIAN FABIAN BOTERO QUIRAMA. Pero la DEMANDADA cuestiona que se hubiese acreditado en el plenario la dependencia económica de la madre frente al hijo, insistiendo en que éste hacía solo un aporte que no representaba la importancia y relevancia exigida en nuestro ordenamiento, para poder afirmar el requisito exigido como beneficiaria de la prestación.

Debe entonces la Sala, efectuar la valoración del acervo probatorio, a la luz de lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo, para efectos de determinar si la parte demandante cumplió con la carga probatoria referida al requisito de dependencia económica exigido en el artículo 13 de la ley 797 de 2003.

- CRISTIAN FABIAN BOTERO QUIRAMA nació el **9 de agosto de 1990**<sup>8</sup> y falleció el **14 de septiembre de 2015**<sup>9</sup> a sus 25 años de edad en el Municipio de Fredonia, Antioquia; era hijo de DIANA PATRICIA QUIRAMA ÁLVAREZ y REINALDO BOTERO SALAZAR.
- La actividad laboral del causante comenzó a sus **19 años** de edad, al servicio de la POLICÍA NACIONAL desde el **8 de marzo de 2010** hasta el **7 de noviembre de 2011**<sup>10</sup>. Pocos días después, el **18 de noviembre de 2011** se afilió a PROTECCION en virtud de su vinculación laboral en el cargo de vigilante con SEGURCOL<sup>11</sup>, efectuando así cotizaciones hasta el mes de **julio de 2015**. Se advierte en la HISTORIA LABORAL allegada al plenario<sup>12</sup>, que los ingresos del joven CRISTIAN FABIAN siempre superaron

<sup>8</sup> Folio 15

<sup>9</sup> Folio 16

<sup>10</sup> Folio 69 – 71

<sup>11</sup> Folio 67

<sup>12</sup> Folio 74



el salario mínimo legal, y además, estabilidad en sus ingresos desde que comenzó su actividad laboral. Habiendo iniciado sus cotizaciones el **18 de noviembre de 2011**, se prolongaron de manera continua hasta febrero de 2013, mes en el que cotizó 15 días; pero a partir de **marzo de 2013** realiza cotizaciones continuas hasta **mayo de 2014**, mes en el que cotiza 15 días. Y reanuda al mes siguiente, cotizando **15 días en junio de 2014** y ahí lo hace de manera continua por un año más, hasta **julio de 2015**.

- Se acredita en el plenario que siendo su madre beneficiaria en salud en la EPS SURA – régimen contributivo<sup>13</sup>; al terminar su vinculación laboral, la Entidad Promotora de Salud le puso en conocimiento el **19 de agosto de 2015**, que en adelante contaría con los servicios del plan obligatorio de salud bajo el régimen subsidiado, por presentarse el retiro del empleo y encontrarse en el nivel de SISBEN 1 o 2<sup>14</sup>.
- La actora solicitó la pensión de sobrevivientes el **8 de enero de 2016**<sup>15</sup>, oportunidad en la que informó que su hijo para ese momento no laboraba, y al hacer la breve descripción de cómo ocurrieron los hechos en que perdió la vida su hijo, informó que se lanzó de un tercer piso y murió en el impacto<sup>16</sup>. También se dejó constancia que en la misma fecha informó a PROTECCIÓN, *“que el afiliado le ayudaba mucho económicamente debido a que ella no labora, en el hogar también aporta la ex pareja pero más que todo es por los hijos que ella tiene con él, hacía 2 años Cristian se había independizado y vivía solo”*<sup>17</sup>. Y sobre los miembros del grupo familiar que aportaban para los gastos de su casa al momento del fallecimiento del afiliado, indicó que CRISTIAN FABIAN de 25 años aportaba para alimentación, gastos de EPS y arriendo; y ANDERSON MONTOYA de 40 años, padre de los hijos, aportaba para servicios y el sustento de los hermanos de Cristian<sup>18</sup>. También afirmó que dependía económicamente de su hijo de forma parcial, en cuantía de \$530.000 desde noviembre de 2011, que utilizaba el aporte económico en alimentación, gastos de EPS y arriendo, y que, con ocasión del fallecimiento de su hijo para solventar estos gastos, *“la familia le está ayudando mientras se le define la pensión”*. La madre suministra la información sobre la ubicación del señor RENALDO BOTERO, informa que no viven juntos y es dueño de un billar<sup>19</sup>.
- El **3 de febrero de 2016** PROTECCION solicita a la DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA de la POLICÍA NACIONAL el certificado de información laboral con destino a la emisión de bonos pensionales TIPO A<sup>20</sup>. En efecto, el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL emitió Resolución el **19 de julio de 2016** con la que reconoció y

---

<sup>13</sup> Folio 120 - 121

<sup>14</sup> Folio 75

<sup>15</sup> Folio 76, 77 y 78

<sup>16</sup> Folio 83.

<sup>17</sup> Folio 84

<sup>18</sup> Folio 85

<sup>19</sup> Folio 86

<sup>20</sup> Folio 97 -

ordenó el pago de un cupón de cuota parte de bono pensional tipo A por el causante<sup>21</sup>.

- Pero desde el **8 de febrero de 2016**, se había ya radicado en PROTECCIÓN el INFORME INVESTIGATIVO realizado por la firma CIZA<sup>22</sup>, en el que se ratificó que el causante se encontraba en el Municipio de Fredonia en plan de paseo, saltó desde el tercer piso del lugar donde estaba hospedado y falleció el 14 de septiembre de 2015. El técnico investigador realizó entrevista a la solicitante, al señor RODRIGO ANTONIO QUIRAMA RODRIGUEZ, a LUZ MARINA CORREA ORTIZ, a GILMA ARIAS CANO, a ROSA ELVIRA CARDONA DE BEDOYA y a LYDA SARY LORA BUSTAMANTE, y después de valorar sus versiones con los demás hallazgos, concluyó:

“Como se aprecia, por lo arriba descrito, el causante le ayudaba a la solicitante con lo del arriendo mensual entre otros gastos, así mismo la tenía como beneficiaria en salud, siendo ella una persona muy enferma y teniendo además dos hijos menores de edad, uno de ellos discapacitado, sin tener ella ningún recurso económico que le pudiera generar ingresos para su sostenimiento, quedando ella muy mal económicamente con la muerte del causante, no teniendo con qué pagar el arriendo y estando desafiada en salud, lo que ha llevado a que la calidad de vida la solicitante se haya visto deteriorada notoriamente tras la desaparición del causante”

- Sin embargo, el **14 de septiembre de 2016**, para dar respuesta al derecho de petición radicado por la actora en el cual solicitó información sobre el avance del trámite de pensión de su hijo, se le indicó que había finalizado la etapa de bono pensional, “*por tanto el trámite pasó a investigación administrativa*”; lo que no consulta la realidad, porque la investigación ya se había realizado y concluido desde el 8 de febrero anterior.
- Ahora, si lo anterior fuera poco, se prueba que el **21 de noviembre de 2016** se hizo una segunda investigación, esta vez por CONSULTORÍAS DEBIA S.A.S, sin que se acrediten las razones para que ello hubiese sucedido, a pesar del plazo de 2 meses que establece la Ley para resolver este tipo de solicitudes pensionales. En esta investigación también se tiene por reclamante, **única y exclusivamente** a la madre del afiliado, de manera que tampoco se originó en el reclamo de otros beneficiarios. En esta oportunidad, se entrevistó a DIANA PATRICIA QUIRAMA ALVAREZ, CLAUDIA PATRICIA BOTERO QUIRAMA, EDISON ARMANDO BOTERO QUIRAMA, RODRIGO ANTONIO QUIRAMA, MARIA ROCÍO ÁLVAREZ DE QUIRAMA, SAMUEL CORREA, GILMA ARIAS CANO, ROSA ELVIRA CARDONA DE BEDOYA y a ALBEIRO DE JESUS FLOREZ ARROYAVE, verificándose con claridad la dependencia económica de la madre frente a su hijo. Incluso, en el informe se presenta un cuadro comparativo según el cual, el **TOTAL DE GASTOS DEL GRUPO FAMILIAR** era de **\$730.000 mensuales** y el **TOTAL**

<sup>21</sup> Folio 131 d- 132

<sup>22</sup> Folio 98 a 117



**DE LOS APORTES DEL AFILIADO** era de **\$490.000 mensuales**, lo que muestra a las claras, la importancia del aporte económico que éste realizaba.

- También se observa que la actora interpuso acción de tutela en contra de PROTECCIÓN, y en virtud de la decisión judicial en la que se tuteló el derecho fundamental de petición<sup>23</sup>, el **25 de enero de 2017** la entidad le informó que *“a la fecha no ha sido posible resolver de fondo la solicitud pensional, porque posteriormente radicó solicitud de pensión de sobrevivientes otro beneficiario, y por tal razón se remitió el expediente a investigación administrativa”*.

Pero, contrario a lo afirmado por la entidad en esa respuesta, ya se ha indicado que no se demuestra por la accionada en este proceso, que persona alguna distinta a la madre hubiese solicitado la prestación. Lo que se advierte es, que habiéndose realizado una primera investigación desde el **8 de febrero de 2016** con la que se acreditó la dependencia económica de la madre frente al hijo, PROTECCION ordenó la realización de una segunda investigación que culminó el **21 de noviembre de 2016**, y con la que también se acredita la dependencia económica de la única solicitante, la madre. Sin embargo, el **26 de mayo de 2017** la accionada remite una comunicación conjunta, dirigida a los padres del causante, DIANA PATRICIA y REINALDO, en la que afirma que no procede el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, y se informa que la **devolución de saldos** se hará efectiva una vez sea presentado el fallo del juicio de sucesión, invocando el **artículo 76 de la Ley 100**<sup>24</sup>

En la **AUDIENCIA PÚBLICA** celebrada el **26 de junio de 2019**, se efectuó diligencia de interrogatorio de parte a la actora, quien no efectuó confesión alguna en contra, reiterando **lo que ya se había constatado en las investigaciones realizadas por la entidad**: Que la obligación de la casa para el momento del fallecimiento de su hijo Cristian la llevaban él y su compañero, el padre de sus dos hijos menores, Carol y Miguel, quien padece na discapacidad. Que desde que falleció Cristian no ha vuelto a pagar el arriendo, y tras la separación del padre de sus hijos, desde hace 5 años y medio, éste solo responde económicamente por ellos, con quien tuvo una relación muy inestable. Explica que “siempre se pactó que Cristian al momento de trabajar pagaba el arriendo y los servicios y Anderson llevaba la obligación de la alimentación y las cosas de Miguel Ángel, porque Miguel Ángel siempre ha devengado muchísimos gastos ya que es un niño operado de corazón abierto, lo ve pediatría, va al comité de rehabilitación, o sea tiene muchísimos gastos médicos mi hijo, entonces en agradecimiento de que Anderson pues ayudó a criar a Cristian, mi hijo, ellos hicieron ese pacto, de que Cristian pagaba arriendo y servicios y Anderson veía por la comida y la obligación de Miguel Ángel”. Y también informa que Cristian no vivía con ella hacía año y medio, se había independizado porque quería formar un hogar, “pero veía por mi

<sup>23</sup> Folio 19 - 21

<sup>24</sup> Folio 22- 23

económicamente, en que instancia veía por mí, seguía pagando el arriendo, siguió pagando los servicios y pues económicamente así como con la comida, con lo que él podía, en las quincenas él aparecía con la bolsita de la leche, con las arepas, o sea con lo que él podía, porque él también tenía que ver por sí mismo, pero Cristian siempre estuvo al pendiente de mí, con el arriendo, con los servicios, como yo sufro de fibromialgia y de lupus, entonces Cristian estaba pendiente de los pasajes para que yo fuera a las citas médicas, a terapias, pues eso implica muchos gastos".

En la misma fecha, declaró **ROCIO ALVAREZ DE QUIRAMA**, madre de la demandante, quién también fue interrogada en su momento por los investigadores; junto con su cónyuge, quienes además de ser los abuelos de fallecido, son los propietarios de la casa en la que vive DIANA PATRICIA con su grupo familiar.

Narra la testigo que CRISTIAN FABIAN se había ido a vivir solo, aproximadamente hacia un año y medio, pero que vivía en el mismo barrio que su madre. Sostiene que su nieto trabajaba como vigilante, "más o menos él se ganaba 1.000.000 o 1.200.000", y que cuando murió su madre vivía con sus dos hijos menores, "ella cuando eso, estaba viviendo con los hijos y tuvo compañero, pero se estaba separando, y cuando Cristian murió ella ya se había separado de él, estaba sola". La testigo indica que CRISTIAN era quien pagaba el arriendo, "Cristian me pagaba 220.000 cada 15 días me daba 110.000" y ANDERSON, "el papá de los niños siempre ha dado un poquito de plata, 30.000 es lo que está dando ahora y con eso ella tiene que sobrevivir", además, de acuerdo a lo narrado, el señor ANDERSON no tiene un trabajo fijo "él, él arregla zapatos y es un sí, hace zapaticos, y vende por ahí zapaticos, pero un trabajo fijo, no". Por otra parte, cuenta que CRISTIAN también se encargaba de los servicios públicos, y añade la testigo que, "él cada 15 días llevaba bolsitas con cositas, un mini mercadito", y explica que, debido al fallecimiento de CRISTIAN "por ahora ella tiene los servicios cortados y nosotros que vivíamos de ese arriendito estamos mal". Cuenta la testigo que DIANA PATRICIA es muy enferma y que debido a eso no ha podido laborar, además era CRISTIAN quien la tenía afiliada a la EPS SURA y le daba los pasajes cuando debía ir a realizar algún trámite o a una cita médica, enfatizando en que su nieto compartía los gastos del hogar con ANDERSON MONTOYA, pues no había otra persona que la apoyara económicamente.

También declaró **LUZ MARINA CORREA ORTIZ**, vecina de la actora y conoce a la familia hace más de 20 años, corroborando con sus dichos, lo afirmado por la demandante y su madre, pudiendo resaltar de su testimonio, lo siguiente:

**"¿Con quién vivía Cristian para cuando murió?:** Él vivía solo, se había independizado, año y poquito; **¿Dónde vivía él?:** Él vivía, a ver, nosotros vivimos en Manrique San Blas, él vivía por el lado de La Terraza, por ahí por esos lados cerquita, no sé cómo se llama ese barrio; **Cuando falleció Cristian ¿con quién vivía Diana Quirama?:** Vivía sola, porque estaba en proceso de separación del muchacho con quien vivía, vivían en una casita que tenía arrendada, que le pagaba arriendo a los padres con los dos niños de ella; **¿Qué edad tenían esos niños?:** Carol tenía como 12 añitos y el niño 5 más o

menos; **¿Recuerda el nombre de la persona con la cual se estaba separando la señora Diana?:** Anderson, no le sé el apellido; **¿Cuánto llevaba él viviendo con doña Diana?:** Pues era como una relación no muy estable, porque él varias veces la había dejado y se iba y volvía, entonces la niña tiene 16 años, él hace como 5 años se fue, por ahí unos 8 años más o menos; (...) **¿sabe usted cuanto pagaba de arriendo Diana?:** Pues ella pagaba 220.000, empezó pagando, él pagaba el arriendo y los servicios, yo soy muy allegada a la familia de Diana, somos muy, es que somos casi como de la familia, vivimos muy cercanas, ella va mucho a mi casa; **¿Quién pagaba esos servicios?:** Cristian; **¿Mas o menos cuanto pagaba de servicios?:** El promedio del barrio es 120.000, 130.000, el promedio del barrio donde vivimos; **¿El señor Anderson contribuía con algo con el sostenimiento de Diana?:** Si, porque Anderson no tenía un trabajo fijo, él se dedicaba a la zapatería, entonces sí, él con los alimentos, era como una obligación compartida; **¿Entre quienes?:** Entre Cristian y Anderson, Diana no trabajaba; **¿A qué se dedicaba Diana para cuando falleció Cristian?:** A la casa, ella tiene un niño especial y desde que el niño nació ella se ha dedicado a la casa; **Luego de fallecer Cristian, ¿quién continuo entonces pagando ese arriendo y los servicios públicos?:** Pues en este momento ella tiene cortados los servicios, el arriendo me imagino pues que no se lo cobra el papá porque ella no tiene ninguna entrada, ella vive de lo que los padres le puedan ayudar y de lo que los buenos vecinos le podamos colaborar, ella no trabaja, el papá de los niños le colabora con el sostenimiento de los dos niños, no sé exactamente cuánto le dará, ella en este momento no, tiene los servicios cortados; (...) **Doña Luz Marina dígame al despacho, usted nos habló de dos niños, de doña Diana, fuera de esos dos hijos y Cristian ¿tiene más hijos la señora Diana?:** Tiene otros dos hijos mayores; **Cuéntele al despacho si esos hijos mayores ¿a qué se dedican, donde viven, con quien viven?:** La muchacha vive a parte con dos niñas que tiene, o sea ella es un hogar aparte y el otro muchacho también tiene una bebé y vive aparte también y el muchacho trabaja cuando le sale un trabajito de albañilería; **Infórmele al despacho para la fecha en que falleció Cristian tiene usted conocimiento si ellos le ayudaban económicamente a la señor Diana:** No señor, no le ayudaban porque tienen sus obligaciones aparte(...) **Señora Luz Marina puede indicarle al despacho si usted presenciaba el momento en el que Cristian hacia algún pago para la casa de la señora Diana:** Si señora, como dije anteriormente yo soy muy allegada a ellos, muchas veces vi que él llegaba con la platica de la abuela a entregarle, inclusive a él le quedaba más fácil darle quincenal, entonces él quincenal partía lo que tenía que darle y pagaba los servicios y muchas veces lo ví entrar con bolsitas de arepa, de leche, a colaborarle con el sustento(...) **Puede por favor indicarle al despacho si el señor Anderson cuando convivía todavía con la señora Diana asumía todos los gastos del hogar:** No, siempre fue compartido porque él nunca tuvo un trabajo fijo, él era ocasional el trabajo (...)

A partir de este acervo probatorio efectúa la Sala el análisis, bajo los postulados del **artículo 61** del Código Procesal del Trabajo y las sub reglas aplicables, en el estudio de estos asuntos, conforme el precedente de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia: **i)** La dependencia económica debe definirse en cada caso particular y concreto, según el análisis conjunto de la prueba legalmente decretada y practicada. **ii)** Para concluir la dependencia, es menester que se demuestre subordinación económica relevante, esencial y preponderante del beneficiario frente al causante para el momento del fallecimiento, de modo que, al faltar el ingreso, se afecte el mínimo sostenimiento de la familia. **iii)** Así, debe entenderse por dependencia económica “«la subordinación de una persona respecto de otra, por necesitar de su ayuda o auxilio para llevar una vida digna», puntualizando que dicha condición desaparece «cuando la persona es autosuficiente, por estar en capacidad de procurarse por sus propios medios los recursos indispensables para su subsistencia en condiciones de dignidad». **iv)** El concepto atiende a “una falta de autosuficiencia económica, lograda a partir de

otros recursos propios o de diferentes fuentes y una relación de subordinación económica, respecto de los recursos provenientes de la persona fallecida, de manera que, ante su supresión, el que sobrevive no puede valerse por sí mismo y ve afectado su mínimo vital en un grado significativo". "La dependencia de los padres respecto de sus hijos no debe ser absoluta, pero en todo caso la relación de subordinación económica respecto de la persona fallecida, debe ser de tal proporción que les impida valerse por sí mismos, aun cuando cuenten con recursos propios o provenientes de terceros".

Pues bien, sea lo **primero** señalar, que las testigos **ROCIO ALVAREZ DE QUIRAMA** y **LUZ MARINA CORREA ORTIZ** fueron espontáneas al responder a las preguntas realizadas, en manera alguna se evidencia que hubiesen sido coaccionados a responder dentro de la diligencia, ni que tengan interés alguno en el resultado del proceso. Se advierte que ante todas las preguntas respondieron coherentemente, guardando fidelidad con lo preguntado y, además, declararon sobre lo que les consta, siendo principalmente testigos de que el causante no vivía con su madre, trabajaba al momento de su muerte y se encargaba de determinados gastos del hogar de su madre.

En **segundo lugar**, porque la versión de la demandante y las testigos del proceso en relación con la importancia del aporte del causante se corrobora con la **prueba documental del proceso**, que nos muestra cómo el causante laboró desde los 19 años de manera continua, con ingresos estables cercanos a los dos salarios mínimos; que desde el momento en que se afilió al sistema de seguridad social integral, reportó a su madre como beneficiaria, recibiendo así las prestaciones asistenciales del Plan Obligatorio de Salud a través de la EPS SURA.

La prueba documental nos muestra que el padre de CRISTIAN nunca reclamó la pensión de sobrevivientes, que se realizaron dos investigaciones a causa de la solicitud pensional de la actora, que finalizaron el **8 de febrero** y el **21 de noviembre de 2016**, respectivamente; en las que se hicieron múltiples entrevistas y recaudó importante información, acreditándose plenamente, la importancia del aporte que CRISTIAN realizó mensualmente a la madre durante tantos años, con el que continuó a pesar de haber decidido irse a vivir solo. Debe destacarse incluso, que justo para el momento de su fallecimiento, la madre se había separado del compañero que contribuía de manera conjunta al sostenimiento del hogar. El INFORME INVESTIGATIVO realizado por la firma CIZA, da cuenta de los efectos económicos generados en la señora DIANA PATRICIA con ocasión de la falta del ingreso mensual de su joven hijo; y el informe de CONSULTORÍAS DEBIA S.A.S, muestra como conclusión, que el aporte mensual del afiliado (\$490.000 mensuales) superaba con creces el 50% del total de gastos del grupo familiar (\$730.000 mensuales).

Y las probanzas del proceso también llevan a la Sala al convencimiento de que, si bien el causante no vivía con su progenitora para el momento de su fallecimiento, seguía contribuyendo al sostenimiento del hogar de forma protagónica, siendo ella ama de casa, con graves padecimientos de salud, y a cargo de dos hijos menores de edad, uno de ellos en situación de discapacidad. Y aunque tiene dos hijos mayores, ellos vivían aparte y cada uno con sus propias obligaciones.

**Finalmente**, en relación con los argumentos esbozados por la recurrente, cabe recordar que conforme la jurisprudencia de la **Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia**, en estos casos en que el demandante y el de *cujus* hacen parte de la misma unidad familiar, [...] *no es procedente desagregar los gastos básicos de cada uno de ellos a fin de determinar si existía dependencia económica, pues ha de entenderse que las necesidades de quienes integran el hogar común en lo que toca con servicios públicos, arrendamiento, salud, vestuario, alimentación dentro y fuera del hogar, y desplazamientos para atender lo propio de la jornada laboral y las actividades diarias, siempre que estén dentro del ámbito de la congrua subsistencia y atiendan al concepto de una vida digna, entran en el presupuesto común de gastos. Luego, la contribución económica del afiliado fallecido fue imprescindible para garantizar a los padres la satisfacción de esos requerimientos primordiales (CSJ SL18980-2017), reiterada en la SL 2327 – 2020.*

Bajo el mismo planteamiento, en aras de la configuración del derecho a la pensión de sobrevivientes, **no es necesario acreditar el monto exacto de lo aportado por el causante**, requisito que no está previsto en la ley (**SL6502-2015 y SL 2327 – 2020**). Para acreditar la dependencia económica de la madre respecto a su hijo, tampoco es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos, sino que, por el contrario, basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que le permita obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna. En este contexto, es que resulta relevante la valoración del denominado mínimo vital cualitativo, porque lo que debe tenerse en cuenta es el conjunto de condiciones materiales necesarias para asegurar la congrua subsistencia de cada persona en particular.

Es el conjunto de consideraciones precedente el que llevará a La Sala a **CONFIRMAR** la decisión de CONDENAR a PROTECCION S.A. a la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES a favor de **DIANA PATRICIA QUIRAMA ALVAREZ**, por haberse acreditado de manera que el aporte del hijo era determinante para su subsistencia, y le asiste el derecho a continuar percibiendo un ingreso que le permita vivir una vida digna, conservando de algún modo las condiciones básicas ofrecidas por el extinto afiliado. Actualizando el retroactivo

desde el 14 de septiembre de 2015 a la fecha de esta providencia, marzo de 2021, se obtiene lo siguiente:

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2015	6,77%	4,53	\$ 644.350	\$ 2.918.906
2016	5,75%	13	\$ 689.454	\$ 8.962.902
2017	4,09%	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	3,18%	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021		3	\$ 908.526	\$ 2.725.578
TOTAL				\$ 56.530.800

Se ordenará a **PROTECCIÓN** seguir pagando a favor de la demandante a partir del **1 de abril de 2021** la mesada pensional equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, con **13 mesadas** anuales. Se descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, conforme lo ordenado en la sentencia que se revisa.

7. INTERESES MORATORIOS

La apoderada recurrente indica que el retraso del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes tiene justificación normativa, porque no se reunían los requisitos exigidos por la Ley 979 de 2003, además de la aparición del nuevo beneficiario, REINALDO BOTERO SALAZAR.

Pues bien, lo primero que debe señalarse es que, conforme lo definido en la sentencia de la Corte Constitucional **C – 601 de 2000**, así como en las recientes sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia **SL1681 – 2020 y SL 3130 – 2020**, la finalidad de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley **100 de 1993** es simplemente la de **resarcir los perjuicios ocasionados a los pensionados por la cancelación tardía de sus mesadas pensionales** y, con ello, hacer efectiva la garantía prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, con apego al cual uno de los principios mínimos fundamentales aplicables al trabajo es el de asegurar el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones.

Por ello, esa corporación ha dicho que esa imperiosa obligación, así como la sanción de intereses moratorios, encuentra un importante fundamento en el hecho de que la «[...] pensión es el ingreso periódico con el que cuentan las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad o en estado de indefensión, y los miembros del grupo familiar, para sortear sus necesidades básicas y existenciales», además de que



«Dada su conexión con el mínimo vital y existencial y los derechos de grupos especialmente protegidos, la Constitución Política le dispensa un trato especial [...]» **(CSJ SL1681 – 2020)**. En paralelo a lo anterior, ha sostenido que los intereses moratorios son simplemente resarcitorios y no sancionatorios<sup>25</sup>; de manera que no es pertinente efectuar algún análisis sobre la conducta del deudor obligado, sino que proceden automáticamente por la mora en el pago efectivo de la obligación<sup>26</sup>.

Así, y al permanecer vigente la jurisprudencia de la Corte en torno al carácter meramente resarcitorio de los intereses, no es necesario realizar algún examen de la conducta de la entidad obligada tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe. Ello con la salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que, finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales relativas a la validez de algunas normas, pero contrario a lo afirmado por la recurrente, no es éste el caso que aquí se presenta.

Por el contrario, lo que se acredita es una tardanza injustificada en el reconocimiento de la pensión, a pesar de haberse efectuado dos investigaciones con las que se comprobó la satisfacción de la exigencia legal consagrada en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 para otorgar la pensión a la demandante; quien se vio precisada a interponer acción de tutela para obtener una respuesta de fondo a la solicitud del derecho pensional, obteniendo una negativa sin explicación alguna, con respuesta formato para que adelantara el trámite de devolución de saldos con el padre del causante, como herederos.

Finalmente, tampoco se demostró en este proceso que se hubiese presentado un conflicto entre beneficiarios, ni que se hubiese demostrado la reclamación de uno con mejor derecho (compañera, cónyuge o hijos), que eventualmente pudieran disputar el de la actora; siendo claro que, ni siquiera se demostró que el padre del causante, hubiese efectuado solicitud pensional alguna. Se CONFIRMARÁ así la CONDENA impuesta.

## 8. CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA

La recurrente también solicita que se absuelva de la CONDENA EN COSTAS, por todos los trámites que se adelantaron y la buena fe que se presentó en el proceso. En relación

<sup>25</sup> **CSJ SL, 23 sep. 2002, rad. 18512; CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 42839; y CSJ SL10728-2016**, entre muchas otras

<sup>26</sup> Sentencia CSJ SL, 27 feb. 2004, rad. 21892,

con este aspecto, baste señalar que PROTECCIÓN resultó vencida en el proceso, por ello, en los términos del **artículo 365 del CGP**, debe asumir el pago de las costas. Y al no salir adelante el recurso de apelación, también se causan costas en segunda instancia. **Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de 2 S.M.L.M.V.**

## 9. LA DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE:**

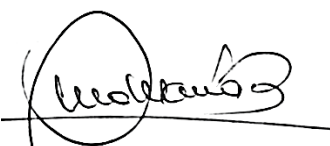
**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juez Noveno Laboral del Circuito de Medellín el 26 de junio de 2019, pero se **MODIFICA** el NUMERAL **SEGUNDO**, porque el valor del retroactivo pensional causado desde el **14 de septiembre de 2015** hasta **marzo de 2021** asciende a la suma de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$ 56.530.800)**.

**PROTECCIÓN** seguirá pagando a la demandante a partir del **1 de abril de 2021** la mesada pensional equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, con **13 mesadas** anuales. Se descontará del valor del retroactivo los aportes en salud, conforme lo ordenado en la sentencia que se revisa.

**SEGUNDO: SE CONDENA** en costas a PROTECCION en esta instancia. Las agencias en derecho ascienden a **2 S.M.L.M.V.**

Notificación surtida en ESTADOS. Se termina la audiencia y en constancia se firma por quienes intervinieron.

Los Magistrados,



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -  
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por  
estados N ° 54 del 5 de abril de 2021

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>



RADICADO: 050013105-009-2017-00550

SENTENCIA del 26/03/2021

Con este código puede acceder a la actuación de segunda instancia,  
**para ello debe tener una cuenta de Microsoft.**